

A-III-5

E.C.
Aclia

CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE CHILE

I

Inicialmente el motivo de esta carta conjunta de la Izquierda Cristiana (I.C.) y los partidos del Movimiento Democrático Popular (MDP), fue pronunciarse exclusivamente sobre el documento "Bases de sustentación del Régimen Democrático", que suscribiese un grupo de organizaciones políticas el pasado 8 de Septiembre. Sin embargo, posteriormente concluimos que ello no era suficiente, pues hay nuevos acontecimientos que han introducido cambios en el escenario político chileno y que, además, están perturbando seriamente las relaciones y la confianza entre las fuerzas políticas opositoras. Estimamos nuestro deber no eludirlas ni postergarlas. El país exige seriedad y veracidad a los partidos políticos y, nosotros, Izquierda Cristiana y los partidos del MDP, como parte substantiva de la Izquierda chilena, queremos explicitar nítidamente la voluntad política que nos anima.

El desafío no es hablar "en el papel" sobre la gobernabilidad futura, sino demostrar desde hoy capacidad para crear condiciones de gobernabilidad a partir de una actitud positiva que comience por tomar seriamente en cuenta el conjunto del cuadro político opositor. Sólo es creíble lo que se diga anticipadamente sobre el mañana, cuando haya una correspondencia política con el presente.

Al respecto quisiéramos establecer una primera y categórica afirmación: En Chile no hay salida auténticamente democrática ni gobernabilidad ni paz social y política posible, si ella pretende fundarse en la exclusión de un sector social y político con existencia real en el país. En este aspecto no puede un sector de la oposición confundirse con la misma política de la dictadura, porque ésto prolongaría la lógica de la guerra, cuya superación todos hemos declarado como objetivo. Más grave aún, cuando se trata de fuerzas políticas populares, que históricamente han representado a más de un tercio de nuestro pueblo.

Pensamos que un error político en que han incurrido permanentemente algunos sectores democráticos en la definición de sus políticas de alianza, es el de aceptar como censor de ellas a la propia dictadura. Es ésta, quien, absurdamente, intenta definir títulos democráticos de los partidos políticos y, en particular de los de la Izquierda Chilena. Nos parece inexplicable que haya quienes terminen, en definitiva, dependiendo y subordinándose a las falsas calificaciones que sobre este punto hace el régimen y otras fuerzas de derecha que han sido su sostén. Este hecho ha

impedido la necesaria e imprescindible unidad de todos los sectores políticos que luchan por la democracia y contra la dictadura.

Por nuestra parte, como víctimas directas del golpe de Estado y de estos 13 años de terror, desde el primer día, desde el 11 de Septiembre de 1973, hemos luchado consecuentemente por reconquistar la democracia y por construir la más amplia unidad en torno a este objetivo, dejando al juicio de la historia el esclarecimiento de la responsabilidad de cada cual en el quiebre de la institucionalidad democrática y en el sostenimiento posterior de la dictadura.

Con la certeza de invocar una vida consecuente al servicio de Chile, de nuestro pueblo y al desarrollo de la democracia, decimos con sencillez, ahorrándonos calificaciones respecto de otros, que no aceptamos que sea materia de discusión la vocación democrática de la Izquierda chilena. Salvador Allende está ahí como testigo.

Algunos enarbolan como causal justificatoria de la exclusión y de la "imposibilidad" de concertación democrática, las diferencias existentes en materia de estrategia de lucha contra la dictadura. Naturalmente que es lícito buscar clarificaciones mutuas y concordancias en torno al camino que debe conducirnos a la plena democracia y a los medios y acciones que corresponda desplegar en conjunto. Respecto de esto, siempre hemos estado dispuestos al diálogo y discusión y hoy renovamos esta voluntad.

Por lo mismo, nos preocupa que, con superficialidad, algunas fuerzas opositoras se sumen al discurso de Pinochet, de condena a un sector de la Izquierda, acusándola de violencia y terrorismo. Sobre el origen de ambas, ni la hipocresía ni la mentira oficial pueden esconder la verdad. Podríamos convocar a los desaparecidos, a los ejecutados, degollados, quemados, torturados, exiliados, que testifiquen sobre el terror. Podríamos mirar y escuchar a los cesantes, a los trabajadores, a los pobladores, a los expulsados, a los procesados políticos por judicatura militar u ordinaria, para que testifiquen sobre la violencia.

Nosotros condenamos el terrorismo y no queremos la violencia.

El terrorismo ha sido y es una práctica ajena al movimiento popular. Nuestra historia es testigo que éste ha sido introducido como un método deleznable por las fuerzas más oscuras de la reacción.

En cuanto a la violencia, debemos recordar que más allá de cualquier definición filosófica o ideológica, la ética cristiana que culturalmente nutre a nuestro pueblo, nunca asimila la violencia de los que se rebelan contra la injusticia y la opresión, con la violencia de los poderosos.

Obviamente, no se nos escapa, que indisolublemente asociado con la legitimidad ética, debe concurrir el requisito de la eficacia, de idoneidad del medio para el fin libertario que se busca.

En nuestra definición, el camino de la lucha democrática de masas constituye la fórmula central para alcanzar la democracia.

La dificultad que presenta esta lucha libertaria es que se enfrenta a un régimen que no sólo es la causa principal del terrorismo y de la violencia en Chile, sino que la ejerce activa y cotidianamente contra todo el pueblo y encarnizadamente contra el Movimiento Popular. ¿Es acaso necesario recordar los allanamientos masivos a poblaciones; los asesinatos por civiles no identificados los días de protesta, para luego inculpar a los convocantes como responsables de esas muertes de inocentes; la represión brutal a los estudiantes, con allanamientos y desalojos de sus casas de estudio; los periódicos silenciamientos de los medios de comunicación democráticos?

Mientras más tiempo se prolongue esta realidad, mayor será la tendencia a que surjan personas o grupos que propicien la incorporación de formas violentas de lucha y esto, -a su vez,- generará un activo proceso de discusión política. Como es de pública evidencia, este es un tema de debate y discrepancia en el seno de la Izquierda, e incluso, entre quienes suscriben esta carta.

La posibilidad de superar estas diferencias y llegar al indispensable acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas, debiera fundarse en requisitos y exigencias objetivas, a partir de las cuales todos los participantes en tal entendimiento, se comprometan a ceñir su conducta a las tareas y medios comúnmente acordados. Abona esta perspectiva, nuestra convicción acerca de la sincera voluntad de todos de terminar con la dictadura y la violencia. Aquí radica la clave de las posibilidades reales de entendimiento democrático.

La unidad, ,por la cual la Izquierda ha luchado permanentemente, supone la voluntad de concordar un camino de lucha común y ello incluye un compromiso leal y serio de todas las fuerzas políticas. Nosotros reiteramos que hay un camino de liberación sobre el cual puede concretarse un amplio consenso democrático. Este camino capaz de unir a todos los chilenos, civiles y militares, políticos e independientes, está basado en el empleo de la fuerza de la mayoría del pueblo, en la movilización social y la desobediencia civil.

En la situación actual, una fórmula de recambio no constituye una salida política real a la crisis. La búsqueda de salidas restringidas, basadas en apoyo externo, principalmente de EE. UU., compromete no sólo valores como la autodeterminación nacional, sino que termina significando el sacrificio de la unidad del pueblo y la hipoteca de su anhelo de democracia.

En síntesis, nos parece importante reafirmar cinco planteamientos:

- a) No hay salida auténticamente democrática, ni gobernabilidad ni paz en Chile, si ella pretende construirse sobre la base de la exclusión, la discriminación o la proscripción política. Cualquier sector opositor que asuma alguna de estas alternativas, está optando, a su vez, por un régimen restrictivo, obligado a imponer disciplina a través del sometimiento por la fuerza.

La experiencia internacional es ilustrativa: la transición a la democracia es sólo gobernable cuando las fuerzas políticas con existencia real adhieren a un plan político y a objetivos que se definen en común. Así, ha ocurrido, por lo demás, en la totalidad de los países en donde recientemente se ha puesto término a gobiernos dictatoriales e iniciado experiencias democratizadoras. En Grecia, Portugal, España, Brasil, Argentina, Uruguay y Filipinas, no ha sido posible excluir a las fuerzas políticas con existencia real y la Izquierda ha participado del nuevo sistema político, a pesar que los regímenes dictatoriales intentaron -como acontece actualmente en Chile- una política de exclusiones. Cuando ha predominado la exclusión, el proceso político puede evolucionar de manera trágica, como ha ocurrido en El Salvador.

- b) El aporte de la Izquierda a la democracia en Chile ha sido sustantivo y vitalizador de nuestro ser nacional. Desde la creación de la CORFO y el proceso de industrialización; la depuración del sistema electoral y el establecimiento de la cédula única; desde la ampliación del sistema educacional hasta la nacionalización del cobre; desde las leyes sociales hasta la reforma agraria, las grandes realizaciones de la sociedad democrática chilena estuvieron asociadas al quehacer de los partidos políticos populares. Por el contrario, las crisis institucionales están todas ligadas a crisis de la clase dominante. El problema político en Chile y en América Latina es que las fuerzas dominantes en la derecha política no son democráticas, y, la más de las veces, sus intereses no son nacionales.

Asimismo, nuestra historia política nos enseña que cuando el centro establece alianzas con los sectores populares, la

democracia se desarrolla, ganándose en igualdad y justicia. Inversamente, cuando los partidos de centro privilegian sus alianzas con la derecha, su influencia positiva se debilita, y ésta impone su hegemonía, aún sacrificando la democracia.

- c) La Izquierda está dispuesta a enfrentar y discutir seria y francamente el tema de la violencia. Asumimos responsablemente el desafío que plantean los obispos chilenos en el documento episcopal "Felices los constructores de la Paz". Nuestra voluntad es que se erradiquen las causas de la violencia en nuestra Patria y, en este sentido, nos parece necesario discutir sobre las condiciones para la paz. Este es un debate urgente, porque la situación actual debilita seriamente el principio de que el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza. La causa principal -sino única- de esto radica en la ideología de la Seguridad Nacional impuesta por la dictadura, con el consecuente uso -parcial y discriminatorio frente a los chilenos- de las FF.AA., introduciendo la noción de enemigo interno y la lógica de la guerra.

La Izquierda rechaza la militarización de la política. La responsabilidad de este fenómeno recae en los instigadores y sostenedores de la dictadura militar. Creemos necesario un debate abierto, comprendidas las FF.AA., sobre las causas de la violencia y las condiciones futuras de la Paz en Chile.

- d) La unidad de las fuerzas democráticas, sociales y políticas, es la mejor garantía de estabilidad de la futura democracia. La división es sólo causal de consolidación de la dictadura y de prolongación del sufrimiento de nuestro pueblo. Responsablemente llamamos a poner nuestras energías y confianza en el camino de mayoría, que sólo descansa en la fuerza del pueblo, unido y movilizado generando poder democrático, con capacidad de lograr su objetivo: poner fin a un régimen injusto e ilegítimo, para ejercer la soberanía popular.
- e) Junto con hacer de la Democracia y la Paz el gran tema que convoque al conjunto de las fuerzas sociales y políticas del país, debemos reponer el espacio del pluralismo, la crítica y la disidencia en la sociedad, evitando que se asocie - como lo hace el régimen - el concepto de violencia a acciones legítimas y válidas, tales como las jornadas de protesta, la movilización social, la autodefensa de masas, la desobediencia civil, la paralización de actividades o, como se hace en estos días, se asimile la crítica política con la incitación al terrorismo.

Aún es tiempo de rescatar los grandes avances unitarios del primer semestre de 1986 y de concordar una línea estratégica común de lucha contra la dictadura y por la democracia. Manifiestamos la disposición política de asumir activamente la búsqueda del consenso democrático y de aislar políticamente a los promotores de la división.

II

No hay duda alguna que estos años de dictadura no serán un paréntesis en la historia patria. Hemos vivido permanentemente bajo el estado de excepción, se ha gobernado exclusivamente por la fuerza y no en base al consenso. Este régimen declaró, cobardemente, la guerra al pueblo. Sin temor a exageraciones indebidas podemos afirmar que no ha habido familia chilena, ni sector de la realidad nacional que no haya conocido directamente los efectos de la represión.

Como pueblo, colectivamente hemos vivido la experiencia del destierro, pues se ha pretendido privarnos de nuestra tierra y del derecho a escribir la historia de nuestra patria. Estos años no han pasado en vano, no podrán ser nunca borrados ni olvidados. Un "nunca más", es, quizás, el sentimiento más profundo que recorre a Chile entero.

La unidad que reclamamos no es otra que la que reclama y vive nuestro pueblo. Somos parte y nos sentimos solidarios del dolor y anhelo libertario de los chilenos.

Estos años de historia, tierra y tiempo usurpados, nos han dejado profundas lecciones y clarificando muchos conceptos. Para nosotros democracia, derechos humanos, soberanía popular, justicia y libertad han sido y son palabras de profunda significación, pero sobre todo un compromiso con el presente y con el mañana. Solo los que temen al pueblo pueden tener desconfianza sobre el futuro democrático y libertario; nosotros sabemos que este no dejará manipular ni engañar. Es tiempo de destruir viejos fantasmas de división y de desconfianza, que los reaccionarios agitan periódicamente. El poder de ellos, sólo se sustenta en la división de los sectores democráticos.

Este régimen dictatorial, con voluntad de perpetuarse, nos ha demostrado hasta la saciedad que no son eficaces las posiciones

intermedias, que pretenden representar los títulos de la moderación y la racionalidad. Lo que puede ser válido como conducta y comportamiento en democracia, no lo es bajo dictadura. Es necesario discernir porque, como es sabido, nadie puede servir a dos señores a la vez. Y entre democracia y dictadura existe absoluta incompatibilidad. El pueblo ha entendido naturalmente ésto, de ahí su radicalidad ética y su rebeldía contra la dictadura.

En nuestra opinión, la democracia no se transa ni se negocia. Y cuando decimos democracia, nos referimos a realidades muy simples y concretas: la soberanía popular como fuente de legitimidad de todo poder y un régimen político basado única y exclusivamente en ella, cuyo fin principal sea la promoción y desarrollo de los derechos humanos, en toda su integralidad. El régimen estatuido en la Constitución de 1980, es incompatible con esos objetivos, porque -entre otros conceptos- consagra la exclusión y establece la tutela militar, una suerte de soberanía militar, por sobre la soberanía popular. Por ello, a nuestro juicio, no hay negociación posible en base a la antidemocrática Constitución del 80. Más ilusorio aún sería pretender transformar el régimen desde su propia institucionalidad, la que, entre otras cosas, consagra normas y procedimientos que hacen imposible cualquier reforma. Por ello, nos pronunciamos claramente por una concertación sin exclusiones, y reiteramos nuestra disposición a discutir y concordar las bases y contenidos de una propuesta que resuelva la profunda crisis política en que está sumergido el país.

El requisito esencial para avanzar en esta dirección es la voluntad de poner término al régimen vigente. Es posible, con la participación activa del pueblo, concordar con las FF.AA. bajo determinadas condiciones, un proceso real de transición a la democracia, si ellas expresan una voluntad política coincidente en la dirección inicialmente señalada.

Los partidos de la Izquierda chilena, ni en los peores momentos de este régimen, han caído en actitudes o discursos que ignoren el rol profesional que legítima y necesariamente se les asigna a las FF.AA. dentro de un sistema democrático; por ello rechazamos las concepciones y la práctica del régimen que ha desnaturalizado este rol, adjudicándole el carácter de actor político, con intereses e ideologías propias.

III

Planteados los problemas políticos de fondo que dificultan las relaciones y la confianza recíprocas entre las fuerzas opositoras, quisiéramos expresar nuestra opinión sobre el documento "Bases de sustentación del régimen democrático, que suscribiesen -el 8 de Septiembre- trece partidos políticos.

El origen de esta iniciativa se encuentra en la carta del Partido Nacional, de fecha 8 de Julio pasado, dirigida a la Democracia Cristiana llamándola a constituir una alianza de gobierno como alternativa al actual régimen dictatorial. Como producto del intercambio epistolar entre esos partidos, surgió una comisión redactora bilateral, que posteriormente se extendió a un miembro del Partido Socialista de la Alianza Democrática, quienes elaboraron el mencionado documento.

Respecto de este documento, cabe distinguir, por una parte, los elementos de contenido del acuerdo de gobernabilidad que propone, y por otra, el carácter de la iniciativa política en que está inserto.

Respecto de los elementos de contenido, quisiéramos, en primer término, compartir el criterio implícito que fundamenta al Documento sobre Acuerdo de Gobernabilidad, que descarta la institucionalidad autoritaria como base de consenso democrático. De ahí la necesidad de aportar y concordar definiciones básicas y fundamentales sobre el orden político a establecer. Por nuestra parte, próximamente entregaremos un documento de trabajo en esta misma dirección.

Una primera aproximación global sobre el contenido del Documento nos lleva a señalar que tenemos importantes consensos con las ideas centrales que lo inspiran, en relación con aquellas materias que definen los pilares de sustentación del régimen democrático -soberanía popular, derechos humanos, unidad en la diferencia- y el sistema político, en cuyo marco deberá expresarse, con plena libertad, la voluntad popular.

Compartimos la idea que en el régimen democrático deben expresarse los intereses sociales y políticos de todos los sectores,

pero es un error asociar unilateralmente democracia con capitalismo. La experiencia histórica actual prueba lo contrario, y muestra precisamente el alto grado de antagonismo existente entre ambos. Nuestra concepción socialista, tal como la postulara el Gobierno Popular de Salvador Allende, es democrática y se fundamenta en la soberanía popular, en el pluralismo y los derechos humanos.

En cuanto a los criterios formulados de Transición a la Democracia, estimamos que existen elementos de consenso amplios y suficientes para arribar a una propuesta común de la oposición, tal como lo afirmara, por lo demás, la Asamblea de la Civilidad. Compartimos el criterio que el requisito esencial para iniciar el proceso de transición es la superación del obstáculo principal para éste, constituido por el régimen de Pinochet.

En particular valoramos y compartimos el reconocimiento de que: "el poder sólo posee legitimidad en la medida que se origina en el principio de la soberanía popular"; que "en la sociedad existen diversidad de pensamientos e intereses y que éstos se expresan en una pluralidad de opciones políticas, sociales y culturales"; la voluntad de "protección y fortalecimiento de los derechos humanos, individuales, económicos y sociales"; la afirmación de que "la democracia debe basarse en la solidaridad y la justicia", junto a la necesidad de "superación de las extremas desigualdades que existen hoy día en el país" y la "voluntad de velar porque en el ejercicio del gobierno no se transgredan los límites del poder".

Del mismo modo compartimos la decisión de "abrir paso a una legislación laboral que establezca sólidamente los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones; el reconocimiento de la igualdad de los derechos de la mujer, la consagración de los derechos de los jóvenes; la condena futura del golpe de Estado, el respeto a todas las libertades básicas, la propuesta de un sistema político basado en la libre expresión de ideas y organización de partidos, el respeto de mayorías y minorías, el pluralismo partidario, elecciones democráticas y alternancia en el poder; la existencia de un compromiso nacional para superar las desigualdades."

En suma, compartimos sustantivamente todos los conceptos que inspiran un régimen democrático, acorde por lo demás con nuestra tradición histórica, como asimismo las definiciones que asignan a la sociedad y al Estado una responsabilidad en el desarrollo y la distribución justa y equitativa del esfuerzo nacional.

Sin embargo, de la lectura del texto sobre Bases de gobernabilidad surgen, a su vez, comentarios críticos que queremos también, en términos generales explicitar:

- 1.- El tratamiento de las Fuerzas Armadas y las definiciones básicas sobre la defensa nacional, son prácticamente omitidas en el documento comentado. Dado el rol que ellas juegan hoy día y las inaceptables funciones y competencias que le asigna la Constitución de Pinochet, es una materia fundamental de definir en las Bases de Sustentación del Régimen Democrático.
- 2.- Las relaciones entre propiedad privada y libertad. Consideramos que el documento refuerza una sesgada escala de valores, en donde se asocia indebidamente la propiedad con la libertad. Precisamente este criterio ha estado en la base del modelo económico de la dictadura, y por la propiedad de unos pocos, se ha sacrificado la libertad de todos.

Nosotros concebimos una economía al servicio del hombre y rechazamos la concepción individualista y consumista que se ha promovido en estos años. Por lo mismo la política económica de un gobierno democrático, para ser consecuente con el objetivo de dar prioridad al trabajo y a la satisfacción de las necesidades básicas, debe anteponer los criterios de solidaridad por sobre cualquier otra consideración. Por otra parte, en la sociedad moderna la innovación y los cambios tecnológicos tienen un rol cada día más relevante en el desarrollo de la economía.

Ello reafirma nuestra visión de que es el trabajo humano-intelectual y manual- el centro y motor de la economía, la fuente principal de creación de la riqueza.

- 3.- Falta de precisión acerca de la forma en que se ejercitará el derecho a la justicia, en caso de crímenes y otras violaciones graves a los derechos humanos, acaecidas durante este régimen. El problema de los derechos humanos no es un problema individual, de las víctimas o de sus familiares, es un problema social, de todos los chilenos y en particular del Estado.
- 4.- Escasa preocupación por los problemas que plantea la reconstitución democrática del Estado y de la Administración Pública, para asegurar su funcionamiento en términos concordantes con el quehacer y los objetivos de un gobierno democrático.

- 5.- Falta de un criterio preciso sobre el problema de la Deuda Externa. Este es un tema capital, pues determina los márgenes de financiamiento y de recursos del gobierno democrático. Creemos que sobre esto se debe elaborar una fórmula concreta. Hemos llegado a un momento en que varios gobiernos latinoamericanos han anunciado criterios radicales para defender el derecho al desarrollo nacional.
- 6.- Estimamos, finalmente, que el documento presenta insuficiencias de criterios para enfrentar las graves consecuencias para el desarrollo nacional de las transferencias de Activos Públicos a capitales nacionales y extranjeros. Asimismo, nada se plantea respecto de aquellos compromisos que puedan afectar objetivamente al interés nacional y al patrimonio del Estado chileno.

Para concluir, respecto del carácter de esta iniciativa, consideramos que en el presente momento histórico -que está marcado por la presencia de un régimen dictatorial institucionalizado- sería erróneo y extemporáneo convertir - hoy- en un asunto central la cuestión de las alianzas de gobierno del futuro régimen democrático. Ello generaría, inevitablemente, una lucha de hegemonía en vez de favorecer los esfuerzos de concertación. Esto sería contradictorio con el espíritu de la Asamblea de la Civilidad, expresado en el "todos juntos y ~~de~~ mismo tiempo". Hoy necesitamos acuerdos claros sobre los marcos de la convivencia democrática futura. Luego, con lealtad y profunda convicción democrática, debemos permitir que el pueblo elija libremente a quienes gobernarán mañana.

Nos asiste también el fundado temor que esta iniciativa genera una práctica política excluyente, que llevaría a la bipolarización de la oposición democrática. Ello porque, simultáneamente al origen de esta iniciativa, se fueron produciendo hechos lamentables e inexplicables, como el quiebre de una forma de coordinación política existente que comprendía a todos los partidos opositores; la ostensible baja del perfil de la Asamblea de la Civilidad y la incapacidad de impulsar nuevas jornadas de movilización social. Todo ello -después del Paro Nacional del 2 y 3 de Julio- y en circunstancias que los dirigentes titulares de la Asamblea se encontraban encarcelados y precisamente en el momento que los sectores democráticos alcanzaban su mayor fuerza y unidad y, correlativamente, el régimen su mayor punto de debilidad y desconcierto.

A pesar de estos desacuerdos, queremos reafirmar lo que ha quedado de manifiesto a lo largo de este documento. Nos anima una

profunda voluntad patriótica. Nuestra preocupación básica está referida al destino de Chile y su pueblo. Esto ha definido el carácter de nuestra lucha constante contra el régimen actual, así como la generosa disposición que reafirmamos, de alcanzar acuerdos efectivos para el más pronto retorno a la democracia.

Los países que han sufrido profundas crisis nacionales, como en el caso de Chile, no se recomponen con parte de su realidad, sino con el consenso y participación de todos los sectores sociales y políticos democráticos que integran la nación. La gobernabilidad futura de Chile no es asunto de algunos, sino responsabilidad de todos.

En el espíritu de las ideas expuestas, llamamos a impulsar un DIALOGO PARA LA CONCERTACION DEMOCRATICA, que sin alterar las autonomías de los partidos y sus políticas de alianza, permita establecer ante todos los chilenos, con mayor claridad las bases comunes de gobernabilidad, así como los compromisos políticos para impulsar en conjunto la lucha por la democracia.

PARTIDOS DEL MDP

- Partido Socialista de Chile
- Partido Comunista de Chile
- Partido Socialista de Chile (Unitario)
- Movimiento de Izquierda Revolucionario
- MAPU O.C.

IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE